

Demócratas y Republicanos evalúan el Plan Colombia

Aura María Puyana Mutis

En la presidencia de Bill Clinton muchos fueron los debates sobre el significado y posibles impactos del Plan Colombia aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en junio de 2000, como una política integral orientada a garantizar “la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”. Era un momento de campaña electoral en los Estados Unidos, cuando arreciaban las críticas republicanas sobre la pasividad del gobierno demócrata frente a dos realidades que exigían un replanteamiento estratégico de la Casa Blanca: el desbordado crecimiento de los cultivos de coca en el país andino y las negociaciones de paz con las FARC-EP, iniciadas por el presidente Andrés Pastrana Arango desde antes de su posición el 7 de agosto de 1998.

Con la silla presidencial en vilo, el Partido Demócrata aceptó el juego rudo propuesto por la oposición republicana para Colombia. La experiencia piloto de la Iniciativa Regional Andina definió dos estrategias a implementarse en el término de seis años en nuestro país: una explícita, relacionada con el control a la oferta de drogas mediante la destrucción química o biológica del 50% de los cultivos de coca y amapola detectados, y otra implícita relacionada con el fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas para el combate contrainsurgente, cuyo balance en la década de los noventa se juzgaba desfavorable. Los programas políticos, institucionales, económicos y fiscales que también hacen parte del documento, orientados a crear un entorno regulatorio favorable al Tratado de Libre Comercio y su versión bilateral el ALCA, no hacen hoy parte de la evaluación del Plan Colombia. Otro será el momento y los parámetros para medir sus resultados. Con todo y ello, Al Gore perdió las elecciones frente a George W. Bush. Más que un giro hubo una profundización del planteamiento militarista del Plan Colombia.

Después de seis años de vigencia y de US\$ 4.700 millones invertidos, las voces críticas y favorables al Plan Colombia vuelven a sentirse en los medios de comunicación norteamericanos, en el comienzo del clímax electoral en los Estados Unidos. Mientras el New York Time afirma que la “guerra contra las drogas” se perdió porque a pesar de los récord de aspersión y de erradicación manual forzosa, el consumidor final sigue comprando cocaína con calidad y precios similares al año 2000, la Casa Blanca y la Casa de Nariño alegan con óptica menos reduccionista el éxito de la política hacia Colombia.

¿Quién tiene la razón en este maremagnum discursivo? Situándonos en la lógica imperial podríamos decir que las dos partes.

Los argumentos demócratas

Sin olvidar que fueron ellos quienes promovieron el escalonamiento de las fumigaciones aéreas hasta el nivel actual, los demócratas aciertan al afirmar que la

reducción de la oferta de drogas por esta vía fue insignificante respecto de la meta del 50% propuesta por el Departamento de Estado, e incluso contrarrestada por un fuerte incremento en la productividad de cosechas y procesamiento que ponen en cuestión el propio indicador de éxito de la política. El conteo satelital del gobierno norteamericano es para llorar. A pesar de las 690.700 hectáreas de coca asperjadas entre 2000 y 2005, la reducción neta alcanzada fue de solo 19.289 has; al pasar de 160.289 a 144.000 has volvemos a una superficie de siembra similar a la estimada en los años 2000 y 2002. Como si fuera poco, esa pequeña reducción fue rápidamente compensada por el ritmo de los cultivos en Perú y Bolivia, nuestros antiguos proveedores de pasta básica de cocaína.

En números crudos eso significa que por cada hectárea de coca efectivamente erradicada fue necesario fumigar 38.5 has, con las connotaciones socioeconómicas, ambientales y humanitarias que pueden derivarse de un procedimiento tan intensivo e indiscriminado en su aplicación. Contra todo pronóstico oficial, el umbral de ineficacia se alcanzó en el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Con 402 mil has asperjadas entre 2003 y 2005, la superficie con coca lejos de disminuir aumentó de 113.850 a 140.000 has, según las cifras norteamericanas. Las cifras económicas muestran, por su parte, un desalentador saldo en rojo. Si como afirma la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el costo de las operaciones aéreas ascendió a \$1.200 millones de dólares, podemos concluir que por cada hectárea efectivamente destruida se despilfarraron 62.212 dólares (1), una cifra 95% superior al subsidio anual de 3.180 entregado a cada familia guardabosque (2).

La respuesta de los halcones

George Bush y los senadores más aguerridos del Partido Republicano dicen otra cosa. El Plan Colombia no ha fracasado porque está agotando las reservas de droga acumuladas por la mafia y llevando a su límite inferior la capacidad de las FARC para financiarse con los dineros provenientes del monopolio de la pasta básica y la exportación de una parte importante de la cocaína. Aunque disguste el proceso con los grupos paramilitares, y muchos narcotraficantes se le escabullan a las solicitudes de extradición en su contra, su desmovilización y entrega significará la entrega de cultivos, rutas y laboratorios, aunque no en la proporción esperada y deseada.

Mientras no se afecten los precios al detal en los suburbios de Washington o New York, esta es una evidencia no probada. Por lo que se sabe las mafias pueden abastecer con materia prima a sus cristalizaderos y los miles de consumidores de la “dama blanca” no requieren sustituirla por las drogas de diseño o la heroína afgana. Aún es accesible. De ser cierta la tendencia anotada por el Zar Antidrogas, John Walters, sus efectos comenzarán a notarse en las próximas mediciones de precios, consumo y atención médica por adulteración que se realicen en EEUU.

¹ Interamerican Association for Environmental Defense, Informe de Desarrollo Alternativo, Agosto de 2006. En www.aida.org

² “Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca. Junio de 2006”, Proyecto SIMCI, Gobierno de Colombia –UNODC.

Pero los halcones miran más allá. Con independencia del sube y baje de la superficie cultivada con coca y amapola, Colombia se ratificó como un aliado incondicional de los Estados Unidos en América del Sur, lo cual no es nada despreciable en un contexto político sesgado hacia la izquierda y la centroizquierda, según el mapa electoral de los últimos cinco años. Eso en el tablero de la geopolítica regional. En el campo de los negocios, las seguridades otorgadas con la firma del ALCA y el ordenamiento territorial alcanzado en lo que en adelante se llamará el posconflicto paramilitar, augura réditos importantes al capital transnacional en materia de explotación de hidrocarburos, recursos forestales y biodiversidad. Los siguientes cuatro años de Álvaro Uribe en la Casa de Nariño servirán para apuntalar lo conseguido en esos dos aspectos.

El recién nombrado jefe del Comando Sur, General Brantz Craddock, tiene un balance más integral de la política contrainsurgente diseñada para Colombia. A pesar de los reveses, el Plan Patriota supone un aprestamiento militar inédito en las Fuerzas Armadas, del que se espera una ofensiva definitiva sobre las FARC en los próximos años. Ello justifica la segunda fase del Plan Colombia. Con una insurgencia en dificultades para comprar municiones y pertrechos de guerra será más fácil doblégarlas o reducirlas a proporciones de menor peligro para la estabilidad de las instituciones colombianas y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Pero no solo eso. La política antinarcóticos se regionalizó a tal punto que Perú y Bolivia no logran sacudirse del rasero de la erradicación de las plantas de coca como medida de colaboración bilateral con los Estados Unidos, mientras Ecuador afronta las consecuencias políticas internas de haber permitido la instalación de la base de Manta como puntal de operaciones ofensivas en el sur de Colombia.

Estos son los argumentos de demócratas y republicanos. Esa es la mirada imperial sobre nuestro país. Asombra que la intelectualidad colombiana quede atrapada en las mismas preguntas y respuestas. Por eso me pregunto: ¿Desde la sociedad civil colombiana, y sobre todo desde los campesinos e indígenas cocaleros y amapoleros, cuál es el balance? Indudablemente tendrán que mirarse las consecuencias sobre la gobernabilidad local, el bienestar social, la economía regional, el acceso a la justicia y la vigencia de los derechos humanos. Esa tarea está por comenzar.